

Chile: Organizaciones migrantes alertan sobre ausencia de institucionalidad, reconducciones y negaciones arbitrarias a solicitudes de refugio

El Ciudadano · 14 de noviembre de 2025

En Iquique hay denuncias particularmente graves, como reconducciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas sin evaluar su vulnerabilidad ni coordinarse con los sistemas de protección de la niñez y la salud. Además, ya se hizo público que un funcionario una empresa contratada por el Estado para la gestión de personas en situación irregular, está siendo procesado por cohecho y violación contra 2 mujeres migrantes.



En una reunión sostenida entre Michel-Ange Joseph, presidenta del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Servicio Nacional de Migraciones, SERMIG, y David Arboleda, consejero nacional del mismo espacio, con representantes de las organizaciones Rompiendo Barreras (Antofagasta), la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, Ampro Tarapacá (Tarapacá), Movimiento Acción Migrante, MAM (Región Metropolitana), y Migrantes de los Ríos (Región de Los Ríos), se abordaron las graves deficiencias en la atención a las comunidades migrantes y solicitantes de refugio, y el abandono de funciones que el Estado debe garantizar en materia de derechos humanos.

Desde Valdivia, Grace Arango (Migrantes de los Ríos) denunció la ausencia de un director titular en el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la falta de apoyo efectivo desde la oficina municipal, que actualmente comparte funciones con el área de pueblos originarios.

Las organizaciones señalaron que en dicha comuna el servicio que se entrega es “pobre y sin eficiencia”, dejando a cientos de personas migrantes sin orientación ni

acompañamiento adecuado.

En Antofagasta, Elizabeth Andrade y Alexis Contreras (Rompiendo Barreras), indicaron que la situación es igualmente crítica. No existe un director titular en la oficina regional, las plataformas digitales están bloqueadas y las horas de atención son prácticamente inaccesibles.

Las organizaciones locales expresaron preocupación por la falta de atención directa y la sensación de abandono institucional.

En Iquique, Hilary Alvarado (AMPRO Tarapacá), señaló que las denuncias fueron particularmente graves. Se reportaron reconducciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas sin evaluar su vulnerabilidad ni coordinarse con los sistemas de protección de la niñez y la salud.

Además, ya se hizo público que un funcionario de la productora 370 —empresa contratada por el Estado para la gestión de personas migrantes en situación irregular— está siendo procesado por cohecho y violación contra dos mujeres migrantes bolivianas.

A esto se suma que la PDI estaría negando el ingreso a personas que buscan solicitar refugio, impidiendo el inicio formal de este proceso.

Al respecto, Eduardo Cardoza (MAM), manifestó su preocupación por los cambios que se buscan en la legislación chilena para otorgar a las fuerzas armadas el control de las fronteras, siendo este una función de la PDI, y los futuros impactos de los proyectos de ley regresivos en derechos, que afectarán a las comunidades migrantes en diferentes territorios.

Ante este escenario, los representantes de las organizaciones pidieron la activación urgente del SERMIG en terreno, la creación de mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional entre la PDI, el SERMIG, la Subsecretaría de la

Niñez y los servicios de salud, y un pronunciamiento inmediato del COSOC ante estas vulneraciones.

Finalmente, los consejeros nacionales presentes, coincidieron en la necesidad de fortalecer el rol del COSOC para incidir públicamente y exigir respuestas institucionales. De igual manera, es necesario reafirmar la necesidad de la implementación de una política migratoria con enfoque de derechos humanos, género y protección integral.

El Ciudadano

Fuente: [El Ciudadano](#)